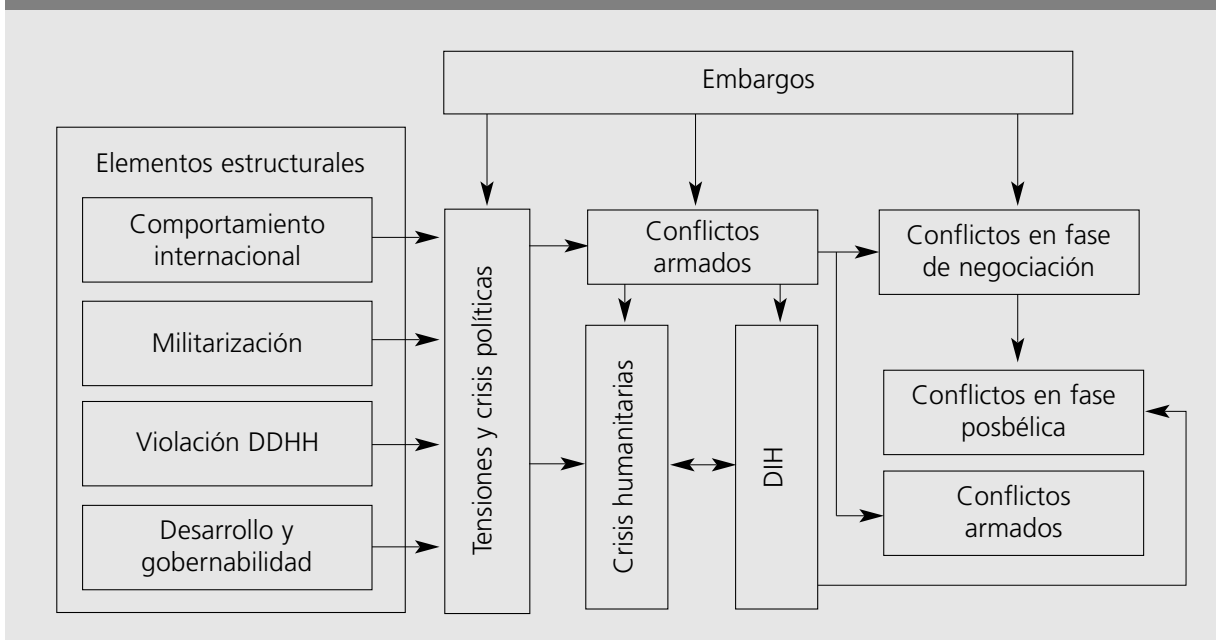


# Introducción

«Alerta 2003: informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz» es un estudio que anualmente realiza la Unidad de Alerta de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, y que sintetiza el estado del mundo al finalizar el año a partir del análisis de varios indicadores. La Unidad de Alerta también edita semanalmente un boletín con información sobre la actualidad internacional, «Semáforo», que a su vez es analizada trimestralmente en la publicación «El barómetro».<sup>1</sup>

En el presente informe «Alerta 2003» se han utilizado 37 indicadores, agrupados en 8 grandes apartados, a saber: comportamiento ante la sociedad internacional, embargos de armas, militarización, derechos humanos, desarrollo, crisis humanitarias, conflictividad y construcción de la paz, y Derecho Internacional Humanitario. La descripción y el análisis de lo que ha ocurrido en el mundo a lo largo del año a través de estos indicadores, puede ayudarnos a conocer mejor los avances, los retrocesos y las dinámicas de diversa índole que afectan al conjunto de la humanidad. La mayoría de estos indicadores, una vez entrecruzados, pueden ayudarnos también a comprender las influencias de unos factores sobre otros, tal como puede verse en la Figura 1. La comparación de estos datos con los del año anterior da al informe un carácter de alerta preventiva sobre algunas tendencias generales o sobre la situación de determinados países, lo que sin duda puede resultar útil, entre otras cosas, para el rediseño de las políticas exteriores, de cooperación al desarrollo y de transferencias de armas, así como para elaborar políticas concretas de prevención de conflictos armados que permitan consolidar los procesos de paz y los procesos de rehabilitación posbélica.

Figura 1: Relación entre los indicadores de alerta



En cuanto al comportamiento de los países ante la sociedad internacional, «Alerta 2003» ha puesto el acento sobre la actitud de los gobiernos con relación a cuatro temas que indican con claridad si a escala mundial mejora la cooperación entre los Estados respecto a asumir y cumplir con normas de alcance universal. Estos cuatro temas son la Declaración del Milenio, la protección de los derechos humanos, la transparencia financiera y la seguridad militar. El seguimiento de las firmas y ratificaciones de los principales instrumentos

1. Tanto el boletín semanal («Semáforo») como el informe trimestral («El barómetro») pueden ser consultados en la web [www.pangea.org/unescopau](http://www.pangea.org/unescopau).

jurídicos incluidos en la Declaración del Milenio (la Corte Penal Internacional, la prohibición de las minas anti-persona, el Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático, el Convenio de Río de Janeiro sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre la desertificación, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño) tiene la virtud de sintetizar en gran medida un amplio conjunto de anhelos expresados por la mayoría de los países, cuyo cumplimiento, retraso o abandono nos permite ver el nivel real de convencimiento de los gobiernos para avanzar hacia un mundo más justo, sano, sostenible y equilibrado. Es de lamentar, en este sentido, que a lo largo del 2002, Israel y EEUU hayan retirado su firma del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, y que Brunei y EEUU sólo hayan ratificado uno de los siete tratados contenidos en la mencionada Declaración del Milenio. Como aspecto positivo cabe señalar que el Protocolo de Kyoto podría entrar ya en vigor en los primeros meses de 2003, al conseguir el mínimo necesario de ratificaciones por parte de países con importantes emisiones contaminantes.

Respecto al comportamiento ante la protección de los derechos humanos, 13 Estados no han ratificado todavía ninguno de los seis instrumentos existentes, y cuatro países asiáticos con un total de más de 263 millones de habitantes (Malasia, Myanmar, Pakistán y Tailandia) han firmado sólo un máximo de dos de los seis instrumentos mencionados, por lo que sus poblaciones pueden tener mermadas sus garantías jurídicas de protección. En relación al comportamiento en términos de transparencia financiera, en 2002 se han logrado pequeños avances, aunque seguían existiendo 38 paraísos fiscales (41 en 2001), de los que 7 no han adoptado todavía las directrices de la OCDE (29 en 2001). También cabe mencionar que existen 11 Estados o territorios que blanquean capitales, frente a los 17 del año anterior. En cuanto al comportamiento en seguridad militar, el balance es igualmente irregular, pues hay 55 países que no han ratificado alguno de los tres tratados sobre armas nucleares o químicas (Israel no ha ratificado ninguno), y sólo 51 Estados han informado al Registro de Armas Convencionales de Naciones Unidas (menos que los 54 que así lo hicieron en 2001). Como avances relativos, 77 países han proporcionado información a Naciones Unidas sobre sus gastos militares, frente a 55 en 2001, y los 16 países africanos que forman el ECOWAS han renovado su moratoria a la importación de armas.

«Alerta 2003» tiene una estructura de indicadores que permite ver también si los países cumplen con los ocho criterios que señala el Código de Conducta de la UE que regula las transferencias de armas, y que exige a los gobiernos considerar la situación de derechos humanos de los países compradores y su nivel de militarización, tensión o conflictividad, entre otros aspectos. Muchos países exportadores, sin embargo, sólo consideran como determinante si un potencial comprador está o no embargado por Naciones Unidas o por organismos regionales, sin analizar el resto de factores comentados. En todo caso, la existencia de embargos sobre 20 países o grupos armados es un indicador importante en este informe, en la medida en que señala contextos sumamente deteriorados o de alto riesgo. Baste señalar en este sentido que de los 12 países cuyos gobiernos están sujetos a un embargo directo, en casi todos ellos se constata un elevado gasto militar sobre el PIB, una pésima situación de derechos humanos, una mala gobernabilidad, y la existencia de personas refugiadas y desplazadas. Respecto al año anterior, en 2002 se ha añadido un embargo a Zimbabue, y han finalizado los existentes sobre Yugoslavia y sobre UNITA en Angola.

Un tercer bloque de indicadores se refiere a los niveles de militarización. El año 2002 ha confirmado una preocupante tendencia al alza en varios indicadores sobre este aspecto, iniciada hace ya un quinquenio, y que permite señalar el abandono definitivo del llamado «dividendo del desarme», esto es, la posibilidad de dedicar cada vez más recursos económicos y tecnológicos al desarrollo humano a partir de una progresiva disminución de la actividad militar. Las tendencias actuales, sin embargo, son de un carácter bien diferente, y eso puede explicar la dificultad de alcanzar otros objetivos señalados en este informe, particularmente los vinculados con el desarrollo. En el último año, con datos disponibles a escala internacional, los gastos militares se han incrementado un 7%, hasta situarse en unos 772.000 millones de dólares, y con perspectivas de continuar aumentando en los próximos años a causa de los proyectos armamentistas de varios países. Han retrocedido igualmente los proyectos de reconversión de la industria militar, y 18 países mantenían sus gastos militares por encima del 6% de su PIB. Seis países han realizado importantes compras de armamento pesado, por un valor superior al 1% de su PIB, y siete países reflejaban importantes niveles de militarización, al tener a más del 2% de su población como efectivos militares. Muchos de los países señalados en

este apartado de militarización han quedado también reflejados en el de violaciones de los derechos humanos, lo que pone de manifiesto la estrecha relación entre ambos factores.

El bloque de indicadores sobre derechos humanos nos muestra el surgimiento de tendencias regresivas y la extrema lentitud con que avanza la universalización de tales derechos. En 2002 resulta extremadamente preocupante el aumento de la aplicación de la tortura y el maltrato en los centros de detención, así como la limitación de las libertades fundamentales, como resultado de la generalización de la legislación antiterrorista en muchas zonas del planeta. Esta involución general se produce en un contexto internacional de por sí frágil en este terreno, pues las organizaciones de derechos humanos señalan que en al menos 51 países se producen abusos relativos al derecho a la vida y a la seguridad de las personas de manera sistemática. En más de la mitad de los países (118) hay constancia de que se aplica la tortura y los malos tratos a los detenidos, 79 países están señalados por graves conculcaciones de las libertades fundamentales, y en 21 existe una grave conculcación de las libertades de expresión y prensa. Naciones Unidas, además, ha manifestado su preocupación por la discriminación sobre los pueblos indígenas que se ha producido en 23 países. La pena de muerte continúa vigente en la mitad de los países, y 84 de ellos la han aplicado en mayor o menor medida (87 países en 2001), destacando las 2.468 ejecuciones realizadas en China. No por casualidad, más de la mitad de los países que han aplicado la pena de muerte presentan índices muy elevados de gastos militares, mostrando una vinculación entre autoritarismo, conculcación de derechos y militarización. En el informe se apuntan también las restricciones crecientes en las políticas de asilo de muchos países, así como un indicador que nos muestra la existencia de 70 países cuya situación interna, ya sea por conflicto o por vulneración de derechos humanos, genera más de 100 asilados reconocidos en cada caso (68 países en 2001).

En el apartado sobre desarrollo es destacable el aumento de países que continúan gastando más recursos económicos para actividades militares que en educación y salud (28 casos en 2002 frente a 24 en el año anterior), hipotecando con ello sus posibilidades de desarrollo. Otros 35 países han sido señalados por el Banco Mundial por su mala gobernabilidad y 13 han retrocedido significativamente en sus compromisos para el desarrollo social. Los indicadores nos muestran igualmente que hay 29 países con una deuda externa superior a su PIB (30 casos en 2001), y que 53 países pagan más a sus acreedores por el retorno de la deuda que lo que reciben de Ayuda Oficial al Desarrollo. Esta pésima situación de un amplio conjunto de países del Sur, más el estancamiento en la reducción del hambre en el mundo, coincide con una política de los países industrializados tendente a disminuir su ayuda al desarrollo. Baste señalar en este sentido que sólo hay cinco países industrializados que han cumplido con el objetivo de destinar el 0'7% de su PIB para ayuda al desarrollo. Como contrapeso, en 2002 se han llevado a cabo tres importantes cumbres vinculadas con el desarrollo: la Conferencia Internacional sobre la financiación para el desarrollo (Monterrey), la Segunda Cumbre Mundial de la Alimentación (Roma) y la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo). Como se podrá comprobar, no obstante, a pesar de que en dichas citas se ha podido mostrar la delicada situación internacional en estos temas, los compromisos adquiridos por los Estados han sido claramente insuficientes.

Como reflejo de la fragilidad de muchos contextos, en este informe «Alerta 2003» se ha querido dedicar un apartado al análisis de las 33 crisis humanitarias que han transcurrido durante el año, y que de una forma muy especial han afectado a más de 30 millones de personas de África Austral y del Cuerno de África. Aunque se han producido nuevos desplazamientos en África, por los que cerca de un millón de personas han tenido que abandonar poblaciones, especialmente en Burundi, Côte d'Ivoire, Liberia o Sudán, el año 2002 debe celebrar que una cantidad muy superior ha podido regresar a sus hogares. Así lo han hecho unos cuatro millones de personas desplazadas o refugiadas originarias de Afganistán, Angola y Sierra Leona, como resultado de la finalización de sus respectivos conflictos armados. En el informe se destaca también, como hecho positivo, el acuerdo que posibilita el acceso humanitario a la población sudanesa, y como aspecto negativo, la agravación de la inseguridad alimentaria en Eritrea y Etiopía. Las crisis humanitarias han afectado tanto a los países con conflicto armado como los que están en fase de tensión y alto riesgo, y muy en especial, a los catalogados como de rehabilitación posbélica.

Como se ha comentado, muchos contextos de crisis humanitarias, de violación sistemática de derechos humanos o de ingobernabilidad tienen que ver con situaciones de conflicto armado o contextos en los que hay una enorme tensión política y/o económica. El año 2002 ha sido especialmente esperanzador en este

sentido, pues por un lado cabe celebrar el fin de los conflictos armados en Afganistán, Angola, Guinea, Rwanda y Sierra Leona, a pesar de que en ninguno de estos contextos el fin del conflicto armado suponga el logro inmediato de la paz. Por contra, el año ha provocado nuevas situaciones de conflicto armado o el agravamiento de situaciones conflictivas ya existentes, como en el Congo, Côte d'Ivoire, la RCA y Senegal. El año 2002 termina con 24 conflictos armados abiertos y con la posibilidad de finalizar con varios de ellos en los próximos meses, como se comentará a continuación. El informe señala también la recurrencia de muchos de los motivos de fondo que explican estos conflictos armados, que pueden resumirse en tres causas principales, muy interrelacionadas entre sí: la lucha por el poder político en contextos de fragilidad o de ausencia democrática, las reivindicaciones de autonomía o independencia, y los enfrentamientos intercomunitarios o por el control de los recursos naturales. El informe apunta igualmente la existencia de 23 escenarios de alta tensión y riesgo, es decir, de contextos donde una multiplicidad de motivos generan disputas, reclamos, enfrentamientos, muertes y Estados de emergencia que pueden derivar hacia un conflicto armado. Como nuevos casos a añadir a los del año anterior se ha puesto el énfasis en la delicada coyuntura de Ghana, Jordania, Kenya, Kirguistán, Madagascar, Uganda y Venezuela, además de la extrema tensión provocada por la amenaza de una guerra contra Iraq.

La lectura positiva del año, sin embargo, es la gran cantidad de procesos de negociación abiertos en su transcurso, y el logro de importantes acuerdos que permitirán iniciar procesos de paz a corto plazo. En los primeros meses de 2002 se firmó un acuerdo de paz en Angola, finalizando así uno de los conflictos más largos, dramáticos y letales de las últimas décadas. Al terminar el año, otros once países con conflictos armados estaban negociando el cese de hostilidades de una manera formal y oficial, siendo los casos más optimistas y esperanzadores los de Sri Lanka, muy avanzado ya, y el de la región de Aceh, en Indonesia. Además de estos once casos, hay otros cinco contextos en fase exploratoria, y varios casos de antiguos conflictos armados todavía no resueltos, en los que las partes continuaban dialogando y, en algunos de ellos, creando medidas de confianza. Estos logros y esfuerzos constituyen la lectura alternativa al desasosiego generado por el anunciado ataque contra Iraq. Los procesos de paz comentados han sido el resultado de un paciente esfuerzo diplomático por parte de muchos países y organismos internacionales y de la implicación de sus sociedades civiles, mostrando con nitidez que cuando el propósito es claro y se logran las complicidades necesarias, es posible invertir los procesos destructivos y sentar las bases para lograr acuerdos.

En consonancia con todo ello, en «Alerta 2003» se han analizado también once casos de países que en los últimos ocho años lograron un acuerdo de paz y se encuentran por ello en fase de rehabilitación posbélica y de construcción de paz. Se trata de contextos que a pesar de ser muy diferentes por su historia y localización geográfica, tienen en común el reto de superar el odio y el resentimiento que produce cualquier guerra, y de restaurar las instituciones y las infraestructuras que permiten volver a la normalidad. En el informe, finalmente, se analizan dos indicadores relacionados con el Derecho Internacional Humanitario, como el Protocolo adicional al Convenio de Ginebra sobre protección a las víctimas de los conflictos armados, y con el estado actual de los menores-soldado, mostrando que todavía existen 19 Estados que reclutan a menores, más otros seis países en los que sus grupos armados siguen con esta práctica.

Tabla 1. Conexiones entre los indicadores

	Embargos 8-9	Gasto militar 10	Aumento GM 11	Importac. armas 12	Soldados 13	DDHH-AI/HRW 15	DDHH- UE 16	DDHH-CDHNU 17	Pena muerte 19	Asilo 20	GM-educ/salud 21	Metas desarrollo 22	Deuda 23	Deuda/AOD 24	LDC 25	Gobernabilidad 26	Emergencia alimentaria 27	Ayuda ECHO 28	Refugiados 29	Desplazados 30	Crisis humanitarias 31	Conflictos armados 32	Conflictos no resueltos 34	Fase posbélica 35	TOTAL	
8-9 Embargos	X	11	-	-	1	9	10	6	5	8	7	6	1	3	6	10	4	9	9	10	5	4	3	4	1	13
10 Gasto militar	11	X	7	7	13	24	29	13	17	19	29	16	6	13	13	17	14	21	24	21	15	9	13	5	6	45
11 Aumento GM	-	7	X	-	2	3	11	3	6	5	9	5	4	7	3	4	4	5	8	7	5	2	3	1	2	18
12 Importac. armas	-	7	-	X	4	3	5	-	2	2	10	2	1	5	2	2	3	5	7	6	3	1	4	1	3	11
13 Soldados	1	13	2	4	X	3	6	2	6	4	9	2	1	3	1	3	3	3	3	5	3	1	6	2	1	16
15 DDHH-AI/HRW	9	24	3	3	3	X	48	17	17	23	24	20	11	26	20	24	22	35	35	34	24	19	17	6	7	58
16 DDHH- UE	10	29	11	5	6	48	X	20	20	26	31	23	16	29	27	29	25	40	45	43	25	19	23	7	9	73
17 DDHH-CDHNU	6	13	3	-	2	17	20	X	5	13	8	10	6	2	11	11	11	15	17	14	12	8	8	1	4	21
19 Pena muerte	5	17	6	2	6	17	20	5	X	7	16	9	3	12	6	9	8	13	12	11	9	4	6	3	2	31
20 Asilo	8	19	5	2	4	23	26	13	7	X	16	10	8	10	14	15	15	23	27	22	17	12	12	4	5	28
21 GM-educ/salud	7	29	9	10	9	24	31	8	16	16	X	14	11	21	17	15	12	22	26	23	13	8	16	8	5	50
22 Metas desarrollo	6	16	5	2	2	20	23	10	9	7	14	X	7	11	18	15	19	22	16	15	13	9	9	1	2	44
23 Deuda	1	6	4	1	1	11	16	6	3	8	11	8	X	6	17	12	16	16	12	11	14	5	8	-	5	29
24 Deuda/AOD	3	13	7	5	3	26	29	2	12	10	21	11	6	X	2	11	10	19	19	22	7	9	9	5	2	53
25 LDC	6	13	3	2	1	20	27	11	6	14	17	18	19	2	X	17	22	26	22	16	21	9	12	1	5	49
26 Gobernabilidad	10	17	4	2	3	24	29	11	9	15	15	15	12	11	17	X	19	21	22	23	17	11	11	3	6	35
27 Emergencia alimen	4	14	4	3	3	22	25	11	8	15	12	19	16	10	22	19	X	33	23	21	30	10	15	2	7	39
28 Ayuda ECHO	9	21	5	5	3	35	34	15	13	23	22	22	16	19	26	21	33	X	40	32	32	17	14	6	9	58
29 Refugiados	9	24	8	7	3	35	45	17	12	27	26	16	12	19	22	22	23	40	X	37	23	18	18	6	11	57
30 Desplazados	10	21	7	6	5	34	43	14	11	22	23	15	11	22	16	23	21	32	37	X	17	19	18	7	8	48
Crisis humanitarias	5	15	5	3	3	24	25	12	9	17	13	13	14	7	21	17	30	32	23	17	X	12	14	1	7	33
31 Conflictos armados	4	9	2	1	1	19	19	8	4	12	8	9	5	9	9	11	10	17	18	19	12	X	4	-	-	21
32 Tensión	3	13	3	4	6	17	23	8	6	12	16	9	8	9	12	11	15	14	18	18	14	-	X	-	7	29
34 Confl-no resueltos	4	4	-	1	2	5	6	1	3	3	7	1	-	4	1	3	2	6	5	6	1	-	-	X	-	12
35 Fase posbélica	1	6	2	3	1	7	9	4	2	5	5	2	5	2	5	6	7	9	11	8	7	-	7	-	X	11
TOTAL	13	45	18	11	16	58	73	21	31	28	50	44	29	53	49	35	39	58	57	48	33	21	29	12	11	

El cruce y contraste entre una selección de los indicadores utilizados en este informe pone de manifiesto la estrecha conexión e interdependencia existente entre algunos de ellos, y a su vez permite ver las características propias de cada contexto. Así, por ejemplo, las situaciones que se han denominado de «alta tensión» se caracterizan por señalar a países con frecuencia muy pobres (el 41% son LDC), que tienen elevados gastos militares (45% de los casos) que a la vez suelen ser superiores a los de educación o salud (55%), que tienen informes negativos de la UE por su situación de derechos humanos (79%), que sufren situaciones de emergencias alimentarias (52%) y que originan movimientos de personas refugiadas (62%) o desplazadas (62%). Contrariamente a lo que suele pensarse, estos contextos de tensión en los que todavía no hay conflicto armado, suponen casi la mitad de las situaciones calificadas de «crisis humanitarias». Son también los espacios donde son más necesarias las políticas preventivas a nivel diplomático, político y económico, y donde la actuación humanitaria tendría que abrir oportunidades para corregir algunas de las pautas señaladas.

Como es lógico, los contextos señalados como de conflictos armados son los que presentan una peor situación de derechos humanos (90% de los casos). Un 90% de estos conflictos generan desplazamientos internos, y en más de la mitad la gente ha de buscar refugio o asilo en otro país. Es también significativo que en algo más de la mitad de estos países exista una mala gobernabilidad, y que en el 62% de los casos se utilicen menores soldados.

Los indicadores relativos a los países de rehabilitación posbélica son también muy elocuentes, en la medida que muestran la extrema fragilidad de muchos de estos procesos y la existencia de dinámicas muy negativas en los países que conforman este grupo. Así, por ejemplo, en el 55% de los casos analizados tienen todavía gastos militares muy elevados (en la mitad de ellos el gasto militar continua siendo superior al de educación o salud), en el 64% se producen serias violaciones de los derechos humanos, el 45% tienen una deuda externa superior a su PIB, el 64% tienen emergencias alimentarias, todos estos países continúan teniendo población refugiada, y lo que es muy significativo, el 64% de estos países están clasificados también en el apartado de situaciones de alta tensión, lo que demuestra la no superación de muchos de los motivos de fondo que en su momento generaron el conflicto armado, y avala la afirmación de que la entrada en una fase posbélica no implica automáticamente el logro de la paz. Los datos aquí apuntados señalan la necesidad de prestar mayor atención a estos contextos de rehabilitación posbélica, no sólo en cuanto a cooperación al desarrollo, sino especialmente en el campo de reconstrucción política y social.

Como se indicaba al inicio, un mejor conocimiento de los contextos aquí señalados debería permitir una mejora de las políticas de prevención de conflictos violentos, así como de las estrategias de cooperación al desarrollo. En este sentido, tanto la Unión Europea como sus países miembros, a título individual, tienen un extenso campo de actuación para hacer posible que los compromisos adoptados en un terreno (el humanitario, por ejemplo) estén siempre vinculados con estrategias para mejorar la situación de los derechos humanos, la gobernabilidad, el desarme o la rehabilitación posbélica. Así, por ejemplo, el 59% de los países donde la UE ha prestado ayuda humanitaria en 2002 a través de ECHO, presentan serias deficiencias en cuanto a derechos humanos y a gobernabilidad. Esa ayuda europea ha tenido también como destino a 21 países que según «Alerta 2003» tienen índices significativos de militarización, por lo que indirectamente dicha ayuda podría perpetuar situaciones de injusticia y desequilibrio interno, a partir de las prioridades militares en la asignación de recursos que tienen esos gobiernos. En definitiva, y como conclusión final de este informe, los datos aquí recopilados apuntan a la necesidad de que tanto los Estados como los organismos regionales o internacionales, las organizaciones no gubernamentales y otros organismos con capacidad de actuación exterior, incrementen la coherencia de sus políticas a través de una lectura transversal de los contextos en los que operan, intentando hacer compatibles diversos objetivos a la vez (especialmente para mejorar la gobernabilidad y la situación de los derechos humanos), aumentando la actividad preventiva sobre contextos de crisis y reforzando su presencia en los contextos de rehabilitación posbélica.

Para la *Escola de Cultura de Pau*, estos compromisos en avanzar hacia el real cumplimiento de las normas de alcance universal, en volver a los principios de la desmilitarización y la creación de medidas de confianza, en fortalecer el régimen de derechos humanos, en luchar contra la corrupción, el nepotismo y la injusticia social, en lograr un desarrollo sostenible y en apoyar decididamente las diplomacias de paz, son los que verdaderamente pueden tener la capacidad real para desactivar las inercias destructivas y las dinámicas de confrontación que existen en el planeta y que quedan reflejadas en este informe.

## Cuadro 2. Lista de indicadores

### A. COMPORTAMIENTO ANTE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL

#### Comportamiento con relación a la Declaración del Milenio

1. Países que no han ratificado los principales instrumentos jurídicos de Naciones Unidas incluidos en la Declaración del Milenio

#### Comportamiento con relación a la protección de los derechos humanos

2. Países que no han ratificado los principales instrumentos jurídicos de Naciones Unidas sobre derechos humanos

#### Comportamiento en términos de transparencia financiera

3. Países que son paraísos fiscales
4. Países que no cooperan con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre blanqueo de dinero

#### Comportamiento en términos de seguridad militar

5. Países que no forman parte de los acuerdos de No-proliferación
6. Países que no han informado al Registro de Armas Convencionales de Naciones Unidas
7. Países que no han informado al Registro de Gastos Militares de Naciones Unidas

### B. EMBARGOS DE ARMAS

8. Países con embargo de armas por parte del Consejo de Seguridad
9. Países con embargo de armas por parte de organismos regionales

### C. MILITARIZACIÓN

10. Países con un gasto militar superior al 4% del PIB
11. Países con un incremento anual de su gasto militar superior al 20%
12. Países con importaciones de armamento convencional pesado superior al 0'5% del PIB
13. Países con un porcentaje de soldados superior al 1,5% de la población
14. Países militarizados según el Índice BIC3D

### D. DERECHOS HUMANOS

15. Países con graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos según fuentes no gubernamentales
16. Países con graves violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales según la UE
17. Países con graves violaciones de los derechos humanos según los informes y resoluciones de la CDHNU
18. Países con informes negativos o críticos del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas
19. Países que aplican o mantienen la pena de muerte
20. Países de origen de personas que han obtenido asilo político

### E. DESARROLLO Y GOBERNABILIDAD

21. Países con un gasto público en sanidad y/o educación inferior a su gasto militar
22. Países que retroceden en el cumplimiento de las metas de desarrollo social de Copenhague
23. Países con una deuda externa total superior a su PNB y Países Pobres Fuertemente Endeudados (HIPC)
24. Países con un gasto en servicio de deuda externa superior a lo que reciben en ayuda oficial al desarrollo
25. Países pertenecientes al grupo de Países Menos Desarrollados (LDC)
26. Países con mala gobernabilidad según el BM

### F. CRISIS HUMANITARIAS

27. Países que enfrentan emergencias alimentarias
28. Países receptores de ayuda humanitaria de la Unión Europea (ECHO)
29. Países de origen donde al menos 1 de cada 1.000 personas es refugiada
30. Países donde hay población desplazada interna

### G. CONFLICTIVIDAD

31. Países con conflicto armado
32. Países con tensiones y disputas de alto riesgo
33. Países con procesos de paz o negociaciones formalizadas
34. Países con conflictos no resueltos
35. Países en situación de rehabilitación posbélica

### H. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

36. Países que no han ratificado el Protocolo II de 1977 sobre conflictos armados intraestatales relativos a las Cuatro Convenciones de Ginebra de 1949
37. Países que incorporan menores como soldados y que no han ratificado el Protocolo Opcional a la Declaración de los Derechos del Niño sobre la participación en conflictos armados